

RESOLUCIÓN IEEPCO-RCG-13/2021, DEL CONSEJO GENERAL CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR NÚMERO CQDPCE/POS/067/2020, DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

**PROCEDIMIENTO ORDINARIO
SANCIONADOR**

EXPEDIENTE: CQDPCE/POS/067/2020.

DENUNCIANTE: EBER JEHOVANNY PÉREZ ALONSO.

DENUNCIADOS: OLIVER LÓPEZ GARCÍA Y ROSALINDA LÓPEZ GARCÍA.



OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

RESOLUCIÓN:

Que recae al Procedimiento Ordinario Sancionador iniciado con motivo de la denuncia presentada por el Ciudadano **Eber Jehovanny Pérez Alonso** en contra de **Oliver López García, Presidente Municipal y Rosalinda López García, Presidenta Honoraria del Desarrollo Integral de la Familia**, por sus iniciales DIF, ambos del Municipio de Santa María Petapa, en la que se califican de inexistentes las conductas de la parte denunciada por la presunta comisión de infracciones a la normativa electoral consistentes en promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, lo anterior bajo el siguiente capítulo de:

RESULTANDO:

De la narración de los hechos que aduce el denunciante y de la información que obra en el presente expediente, se desprenden los siguientes antecedentes del caso:

1. **Denuncia.** El 29 de junio de 2020, la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral [Comisión], recibió escrito original de la quejas presentada por el ciudadano Eber Jehovanny Pérez Alonso, en contra de los ciudadanos Oliver López García y Rosalinda López García, en su carácter de Presidente Municipal y Presidenta Honoraria del Desarrollo Integral de la Familia, por sus iniciales DIF, ambos del municipio de Santa María Petapa, por supuesto uso indebido de recursos públicos con propaganda personalizada en tres cuentas de la red social denominada FACEBOOK, en fechas 22 de marzo y 7 de abril de 2020. El escrito de queja quedo registrado con el número de folio interno 060491.
2. **Acuerdo de radicación.** El 1 de julio del 2020, la Comisión emitió un acuerdo en el que determinó radicar la denuncia y registrarla con el número de expediente **CQDPCE/CA/012/2020**; ordenó realizar diversos requerimientos a los denunciados y a diversas autoridades; e instruyó llevar a cabo la diligencia de verificación de los medios de prueba a portados por el denunciante, consistentes en veintidós ligas electrónicas, por medio del cual se realizaron diversas publicaciones en las cuantas institucionales y/o personales del Municipio o los denunciados.
3. **Diligencia de verificación.** En cumplimiento al acuerdo antes referido mediante acta circunstanciada de número **UTJCE/QD/CIRC-017/2020**, de fecha 1 de julio de 2020, se realizó la inspección de los elementos técnicos proporcionados por la parte quejosa, consistentes en diversos enlaces electrónicos, a fin de corroborar la existencia de la prueba ofrecida por el denunciante, enlaces que corresponden a la red social denominada FACEBOOK, acta en la cual se hizo constar la imposibilidad de poder acceder a diversos enlaces, así como que diversas publicaciones no se encontraban disponibles o posiblemente habían sido eliminadas
4. **Notificación a las partes.** El 6 de julio del año 2020, el personal autorizado del Instituto efectuó las notificaciones por medios electrónicos de los oficios: **CQDPCE/122/2020, CQDPCE/125/2020, CQDPCE/126/2020, CAQPCE/123/2020 y CQDPCE/124/2020** dirigidos a Eber Jehovanny Pérez Alonso; C.P. Nicanor Díaz



Escamilla, Director Ejecutivo de Organización y Capacitación Electoral; y Mtra. Minerva Patricia Ríos Padilla, Directora Ejecutiva de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes; así como a Oliver López García; Presidente Municipal de Santa María Petapa, Oaxaca y Rosalinda López García; Presidenta Honoraria del Sistema DIF en el Municipio de Santa María Petapa, Oaxaca, respectivamente. Dichos oficios se giraron con motivo de notificar el acuerdo radicación y requerimientos, a efecto de que las distintas autoridades rindieron información relativa a las investigaciones correspondientes, a efecto de que la Comisión contara con los elementos necesarios para la integración y tramitación del presente Procedimiento Ordinario Sancionador.

5. **Acuerdo de requerimientos.** En fecha veinticinco de agosto de dos mil veinte, se dictó el acuerdo mediante el cual se informa y requiere los siguientes puntos:

[...]

CUARTO. Requerimiento a Oliver López García, Presidente Municipal de Santa María Petapa, Oaxaca. Tomando en cuenta que ha trascurrido en exceso el término concedido a Oliver López García, para que diera cumplimiento al requerimiento que le fue formulado mediante oficio **CQDPCE/123/2020**, sin que a la fecha se tenga constancia que lo hubiera hecho.

QUINTO. Requerimiento a Rosalinda López García, Presidenta Honoraria del Sistema DIF en el municipio de Santa María Petapa, Oaxaca. Tomando en cuenta que ha trascurrido en exceso el término concedido a Rosalinda López García, para que diera cumplimiento al requerimiento que le fue formulado mediante oficio **CQDPCE/124/2020**, sin que a la fecha se tenga constancia que lo hubiera hecho.

Acuerdo mediante el cual se les hizo efectivo el apercibimiento decretado mediante acuerdo de fecha uno de julio de dos mil veinte, imponiéndoles una amonestación.

6. **Notificación a las partes.** Constancias de las notificaciones de fecha seis de julio del año dos mil veinte realizadas por el personal autorizado; vía medios electrónicos los oficios: **CQDPCE/183/2020 y CQDPCE/184/2020** a Oliver López García; Presidente Municipal de Santa María Petapa, Oaxaca y Rosalinda López García; Presidenta Honoraria del Sistema DIF en el Municipio de Santa María Petapa, Oaxaca, respectivamente, de los cuales se advierte que a la fecha no ha dado respuesta alguna a los requerimientos ordenados.
7. **Acuerdo de amonestación y requerimiento.** Mediante acuerdo de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral, declaró procedente el apercibimiento efectuado a Oliver López García y Rosalinda López García, imponiendo como medida de apremio una amonestación.

De igual forma, se declaró procedente el inicio del Procedimiento Ordinario Sancionador con motivo del incumplimiento a dos requerimientos formulados por la misma Comisión, ordenándose además el requerimiento por tercera ocasión a los denunciados, con el apercibimiento de que, en caso de no cumplir con lo ordenado por la Comisión, se les impondría como medida de apremio una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización.

8. **Notificación a las partes.** En fecha seis de octubre de dos mil veinte, se realizó la notificación por el personal autorizado, de los oficios: **CQPCE/222/2020 y CQDPCE/223/2020** a Oliver López García; Presidente Municipal de Santa María Petapa, Oaxaca y Rosalinda López García; Presidenta Honoraria del Sistema DIF en el Municipio de Santa María Petapa, Oaxaca, respectivamente, del acuerdo de descrito en el punto anterior, por medio del cual se les requirió por tercera ocasión a los denunciados, a efecto de que proporcionaran la información requerida por la Comisión.
9. **Acuerdo de requerimientos.** Mediante acuerdo de fecha dieciséis de octubre de dos mil veinte, se tuvo a los denunciados cumpliendo con el requerimiento formulado mediante proveído de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, sin embargo, con motivo del informe proporcionado por los denunciados, se ordenó requerir diversa información a efecto de que la Comisión de Quejas y Denuncias o



- Procedimiento Contencioso Electoral tuviera todos los elementos necesarios para continuar con la substanciación del presente Procedimiento Ordinario Sancionador. En el mismo sentido, ordenó la realización de la diligencia de verificación en el lugar donde a decir del denunciante los denunciados realizaron la entrega de botes de el antibacterial promocionando con ello la imagen del ciudadano Oliver López García.
10. **Acuerdo de requerimientos.** Mediante acuerdo de fecha trece de noviembre de dos mil veinte, se requirió nuevamente a los denunciados a efecto de que proporcionaran diversa información a la Comisión, misma que consistía en remitir en formato original a través del dispositivo de almacenamiento (USB/CD/DVD) las fotografías que aducen en su escrito de contestación, a efecto de que se pudiera corroborar su dicho, así mismo se contara con mayores elementos de investigación.
 11. **Acuerdo de inicio de Procedimiento Ordinario Sancionador.** En fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, una vez cumplido el requerimiento por parte de los denunciados, la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral, determino que el presente procedimiento se encontraba debidamente instruido, motivo por el cual se dictó el acuerdo de admisión y emplazamiento.
 12. **Diligencia de verificación.** Mediante acta circunstanciada número **UTJCE/QD/CIRC-046/2020** de fecha 23 de octubre de 2020, se realizó la diligencia de verificación ordenada por la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral, a efecto de determinar sobre la vista efectuada por la ciudadana Rosalinda López García en el albergue situado en la demarcación de Matías Romero, misma que tuvo como resultado que el día 7 de abril de 2020, acudió la denunciada a dicho albergue a realizar la entrega de gel antibacterial, sin embargo, no reconoce el envase en el cual fue proporcionado dicho gel.
 13. **ACUERDO DE INICIO DE PERIODO PROBATORIO.** Con fecha dieciséis de febrero del dos mil veintiuno, la Comisión dio cuenta a los integrantes con los escritos de comparecencia de los denunciados, dando inicio al periodo probatorio.
 14. **ACUERDO DE VISTA A LAS PARTES.** Con fecha veinte de septiembre del dos mil veintiuno, la Comisión declaró cerrada la investigación, así mismo, ordenó dar vista a las partes con las constancias que integran el expediente de número al rubro indicado para que dentro del plazo de cinco días hábiles formularan sus alegatos, una vez concluido dicho plazo se ordenó formular el proyecto de resolución correspondiente.
 15. **PROYECTO DE RESOLUCIÓN.** El seis de octubre del presente año, la Comisión de Quejas y Denuncias aprobó por unanimidad de votos de los presentes, el proyecto de resolución para que en términos del artículo 333 de la Ley del Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, el Consejero Presidente lo hiciera del conocimiento de los integrantes del Consejo General para efecto de su análisis, discusión y en su caso aprobación.

CONSIDERANDOS:

1. COMPETENCIA.

Este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto en los artículos 116 fracción IV inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹, 25 apartado D y 114 TER de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como 333 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca².

Lo anterior, porque el denunciante considera que las conductas denunciadas encuadran en infracciones a la normativa electoral, consistentes en promoción personalizada e indebido uso de recursos públicos.

Esto, puesto que aduce que los denunciados realizaron diversas publicaciones en redes sociales, tendientes a posicionarse ante la ciudadanía utilizando recursos públicos para tal fin; ello, en el Municipio de Santa María Petapa, Oaxaca.

¹ En adelante, Constitución Política Federal.

² En adelante, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En consecuencia, se actualiza la competencia de este Consejo General, correspondiéndole conocer y resolver acerca de la posible realización de los actos que se reprochan de ilegales.

2. PLANTEAMIENTOS DE LA DENUNCIA Y DEFENSA

En su escrito, el **denunciante** señaló que en los meses de marzo y abril se percató de la existencia de diversas publicaciones en la red social *Facebook*, específicamente en las cuentas bajo los perfiles “DIF Santa María Petapa”, “Presidente Municipal Santa María Petapa” y “Presidenta H. DIF Municipal”.

Publicaciones en las que se difundía la entrega de gel antibacterial y el nombre del denunciado Oliver López García, Presidente Municipal de Santa María Petapa, por conducto de la ciudadana Rosalinda López García, lo anterior con motivo de la contingencia ocasionada por el virus Covid-19, a fin de encuadrarlas en las excepciones que la Ley impone a la publicidad oficial durante los procesos electorales.

Así mismo, los denunciados al momento de desahogar diversos requerimientos formulados por la Comisión, manifestaron que las cuentas descritas en párrafos anteriores no eran de uso personal y desconocían el titular de las mismas, por ende las publicaciones puestas a consideración por parte del denunciante, consistente en fotografías de la entrega del gel antibacterial, así como el uso de playeras con el nombre del ciudadano Oliver López García, no son atribuibles a los denunciados por desconocer el origen de las cuentas de la red social, ya que no son administradas por sí o por interpósita persona.

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE Y CUESTIÓN PREVIA

A fin de estar en posibilidad de determinar si las conductas denunciadas se encuentran o no en los márgenes constitucionales y legales, acorde a lo planteado por el denunciante; esto es, si los denunciados realizaron promoción personalizada de su imagen con recursos públicos, se debe llevar a cabo el análisis del marco normativo aplicable.

3.1 Promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.

El artículo 134 de la Constitución Política Federal en sus párrafos séptimo y octavo, y el artículo 137 de la Local, en su antepenúltimo y penúltimo párrafo, consagran los principios fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

Refieren que las y los **servidores públicos** de la Federación, los Estados y los **Municipios**, tienen en **todo tiempo** la obligación de aplicar con **imparcialidad los recursos públicos** que están bajo su responsabilidad, **sin influir en la equidad de la competencia** entre los partidos políticos.

Construyen los **alcances y límites de la propaganda gubernamental** al establecer que ésta, **bajo cualquier modalidad de comunicación social**, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno; deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

En ningún caso esta propaganda debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidora pública.

Es decir, los preceptos constitucionales citados restringen el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidatura a cargo de elección popular, y también para promover ambiciones personales de índole política.

En la sentencia recaída en los medios impugnativos SUP-REP-175/2016 y su acumulado³, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación⁴ precisó los supuestos contenidos en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política Federal. A saber.

- La propaganda difundida por los entes del Estado deberá ser de carácter institucional, con fines informativos, educativos o de orientación social.
- En ningún caso podrá implicar promoción personalizada de parte de servidor público alguno.

³ Sentencia consultable en la página de internet oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en el enlace electrónico <https://www.te.gob.mx/buscador>.

⁴ En lo subsecuente, Sala Superior.



De esta manera, se advierte que las restricciones en materia de propaganda gubernamental están dirigidas a los sujetos señalados expresamente en el primer apartado.

Es decir, a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

Lo anterior bajo la lógica de que válidamente son esos sujetos quienes difunden propaganda gubernamental atendiendo a su naturaleza de sujetos de derecho público.

Por su parte, el artículo 108 de la Constitución Política Federal y 115 de la Local definen como **servidores públicos** a las y los **representantes de elección popular**, a los miembros del Poder Judicial, las y los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los Congresos o en la Administración Pública.

En cuanto al segundo apartado, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-74/2011⁵, el Pleno de la Sala Superior señaló que estamos ante propaganda gubernamental cuando el contenido de algún promocional, esté relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público y no solamente cuando la propaganda sea difundida, publicada o suscrita por órganos o sujetos de autoridad o financiada con recursos públicos y que por su contenido, no se pueda considerar una nota informativa o periodística.

Concluyó que para hacer plenamente efectivas las normas constitucionales precisadas y calificar la propaganda como gubernamental o no, es **innecesario** que ésta provenga de alguna persona pública, o que **sea contratada o pagada con recursos públicos**, porque el término "gubernamental" sólo constituye un adjetivo para calificar algo perteneciente o relativo al gobierno como pieza angular del Estado, sin que exija alguna cualidad personal de quien la emite.

De esto se sigue que **la promoción personalizada se actualiza cuando tenga la tendencia de promocionar, velada o explícitamente, a una o un servidor público**⁶.

Lo que se produce cuando la propaganda tiene la tendencia a promocionarlo(a) destacando su imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los logros de gobierno con la persona más que con la institución, y el nombre y las imágenes se utilicen en apología de la o servidor público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales, o bien, para favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos.

Asimismo, estableció que no toda propaganda institucional que de alguna manera utilice la imagen o el nombre de un servidor público, puede catalogarse como infractora, porque es menester que primero se determine si los elementos que en ella se contienen, constituyen verdaderamente una vulneración a los mencionados principios de imparcialidad y equidad de los procesos electorales.

En su jurisprudencia de rubro "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA"⁷, la Sala Superior estableció los elementos necesarios para tener por actualizada tal infracción:

- a) **Personal.** Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la o el servidor público.
- b) **Objetivo.** Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y
- c) **Temporal.** Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó **iniciado formalmente el proceso electoral** o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la

⁵ Sentencia consultable en la página de internet oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en el enlace electrónico <https://www.te.gob.mx/buscador>.

⁶ Véase al efecto la sentencia dictada por el Pleno de la Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-43/2009, visible en el enlace electrónico <https://www.te.gob.mx/buscador>.

⁷ Jurisprudencia consultable en la *Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral* del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 8, número 16, 2015, páginas 28 y 29; así como en el enlace electrónico <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=PROPAGANDA,PERSONALIZADA,DE,LOS,SERVIDORES,P%C3%9AUBLICOS,ELEMENTOS,PARA,IDENTIFICARLA>.

promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas.

Sin que dicho periodo pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de su proximidad para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo.

3.2 Presunción de inocencia y carga de la prueba.

Por otra parte, es de mencionarse que, en los *procedimientos ordinarios sancionadores*, al tratarse de procedimientos de carácter dispositivo, **la responsabilidad no se presume, sino que se acredita, pues lo que se presume es la inocencia**, en atención al principio reconocido en el artículo 20 apartado B fracción I de la Constitución Política Federal, el cual opera a favor de los denunciados.

Principio que también se encuentra recogido en los artículos 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Mismo que resulta aplicable en la materia, al tratarse de una manifestación de la facultad sancionadora del Estado mexicano.

En ese sentido, la presunción de inocencia no deriva en que el acusado niegue los hechos, sino que es un derecho y por tanto corresponde en todo caso a la autoridad, como parte del ejercicio punitivo del Estado, investigar y reunir los elementos que, concatenados entre sí, generen la convicción de su responsabilidad, por ello, de no aportarse los medios de prueba idóneos y suficientes, deriva en que no se acrediten los elementos del ilícito. Lo anterior, conforme al criterio reiterado por la Sala Superior consistente en que al derecho administrativo sancionador electoral le son aplicables los principios de la referida facultad sancionadora del Estado.

Principios propios del derecho penal, tal como se advierte en la tesis de rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”⁸.

Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales debe tener un respaldo legalmente suficiente, no obstante, las amplias facultades que se le otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos.

Aunado a lo anterior, tratándose de procedimientos sancionadores **la carga de la prueba corresponde al denunciante**, conforme a lo dispuesto en los artículos 325 numeral 2 y 329 numeral 2 fracción V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas.

Sustenta lo antes expuesto, lo señalado por la Sala Superior en las jurisprudencias de rubro “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LA DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA”⁹.

4. ESTUDIO DE FONDO

Establecido lo anterior, se procederá al análisis de los elementos que constituyen las infracciones denunciadas, para verificar si se actualizan o no dichas hipótesis normativas.

Promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.

El denunciante señala que en los meses de marzo y abril de 2020, en las cuentas institucionales y/o personales del Presidente Municipal, Presidenta Honoraria del DIF y del DIF Municipal, todas del Municipio de Santa María Petapa, Oaxaca, en la red social Facebook, se realizaron diversas publicaciones relacionadas con la promoción del nombre e imagen del presidente municipal, a través de la entrega de gel antibacterial, bajo el amparo de ser acciones relacionadas con la pandemia ocasionada por el virus

⁸ Consultable en *Justicia Electoral*, revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 6, año 2003, páginas 121 y 122; así como en el enlace electrónico <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XLV/2002&tpoBusqueda=S&sWord=DESARROLLADOS,POR,EL,DERECHO,PENAL>.

⁹ Consultable en la *Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral* del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 9, 2011, páginas 31 y 32; así como en el enlace electrónico <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2011&tpoBusqueda=S&sWord=EL,DENUNCIANTE,DEBE,EXPONER,LOS,HECHOS>.

Covid-19, a fin de encuadrarlos en los supuestos de excepción que la ley establece durante los procesos electorales.

Luego, a través de la diligencia de fecha uno de julio de dos mil veinte, asentada en el acta número UTJCE/QD/CIRC-017/2020, personal de la Comisión procedió a la verificación del contenido de los enlaces electrónicos proporcionados por el denunciante en su escrito de denuncia.

Al acta señalada en el párrafo anterior, se le concede valor probatorio pleno¹⁰, por haber sido elaborada por funcionariado público de este Instituto en el ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas; por lo que genera convicción en este Consejo General de que lo ahí asentado es acorde a la realidad, máxime que su contenido no fue controvertido por las partes.

De dicha acta se advierte que el personal de la Comisión accedió a las cuentas de Facebook "Dif Santa María Petapa", "Oliver López García", "Rosalinda López García", en las que constató, en primer momento, la imposibilidad de poder acceder a las publicaciones de dichos perfiles, en atención a que, se requería indispensablemente contar con un usuario y contraseña, o bien que las publicaciones no se encuentran disponible a todo público, es decir, se trata de una cuenta privada, en la cual únicamente se puede acceder contando con un perfil, así como que algunas de las publicaciones habían sido eliminadas, por lo cual no se pudo constatar sobre la veracidad de los hechos denunciados.

Sin embargo, de la misma acta, se pudo constatar que en la foja número once, se tuvo acceso a la publicación efectuada desde el perfil denominado "G Cruz Morales", del cual se desprende la existencia de siete placas fotográficas, donde se advierte un grupo de personas sosteniendo en las manos lo que al parecer es un envase de plástico, sin que pueda determinar el contenido de los mismos, así como no se advierte con claridad lo escrito en las etiquetas, circunstancia que por sí misma no puede tener por acreditada la existencia de la promoción personalizada del denunciado Oliver López García, a través de los envases de gel antibacterial que denuncia el ciudadano Eber Jehovanny Pérez Alonso, para mayor referencia se inserta las imágenes correspondientes.



Aunado a lo anterior, en el expediente, a fin de acreditar los hechos materia de la denuncia, únicamente se cuenta con los enlaces electrónicos proporcionados por el denunciante, y la diligencia que para verificar su contenido practicó la Comisión de Quejas y Denuncias.

De esta forma tenemos que no existen elementos probatorios o reconocimiento por parte de los denunciados o de alguna autoridad municipal, respecto de que la cuenta en la que aparecen las publicaciones en cita pertenezca a los denunciados, sea la cuenta

¹⁰ En términos de lo dispuesto por los artículos 325 numeral 3 fracción I y 326 numerales 1 y 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

institucional del Gobierno Municipal de Santa María Petapa, Oaxaca o, al menos, administrada por personal a su cargo.

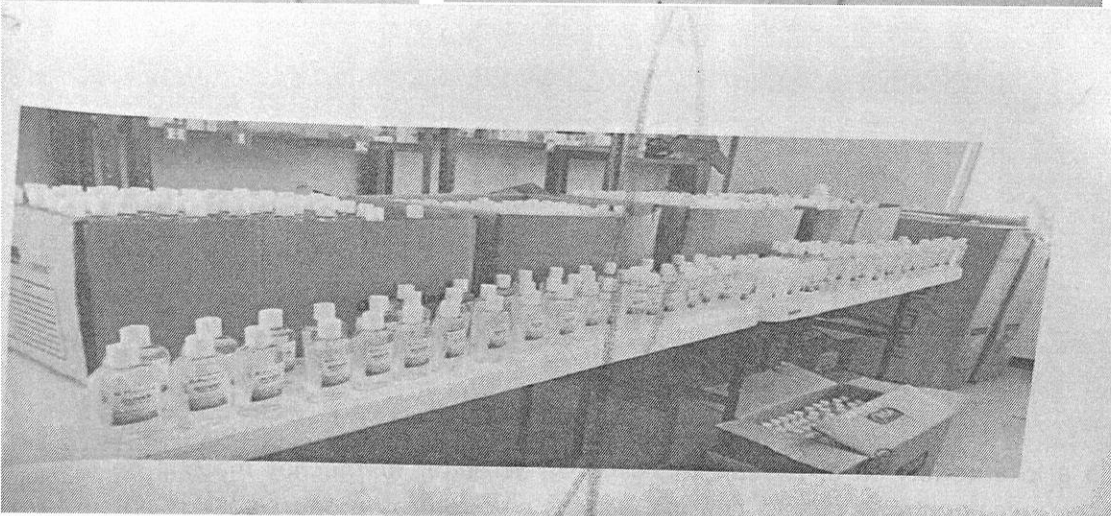
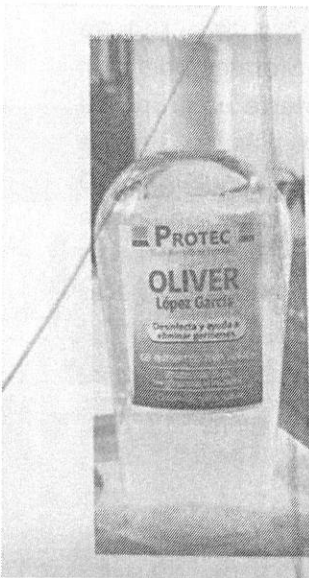
Esto es así, puesto que es un hecho público y notorio para este Consejo General que, en Facebook como en la mayoría de las redes sociales, cualquier persona puede “abrir” una cuenta y asignarle el “nombre de perfil” que le plazca, ya sea utilizando su propio nombre, el de un tercero o un ficticio.

Establecido lo anterior, respecto de la cuenta que se atribuye a los ciudadanos Oliver López García y Rosalinda López García, así como del DIF Santa María Petapa, no existe reconocimiento de que la misma pertenezca o sea administrada por los denunciados o por funcionarios municipales o en su defecto por personas a su cargo o que se les haya encomendado dicha función; por ende, no existe certidumbre que lo ahí publicado sea su responsabilidad.

Máxime que, como se dijo, en los *Procedimientos Electorales Sancionadores* como el que ahora nos ocupa, lo que se presume es la inocencia de la denunciada, y corresponde al denunciante o a la autoridad instructora demostrar su culpabilidad fuera de toda duda razonable.

En ese contexto, resulta inviable analizar si su contenido implicó o no promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, al no existir certeza en la responsabilidad sobre tales actos.

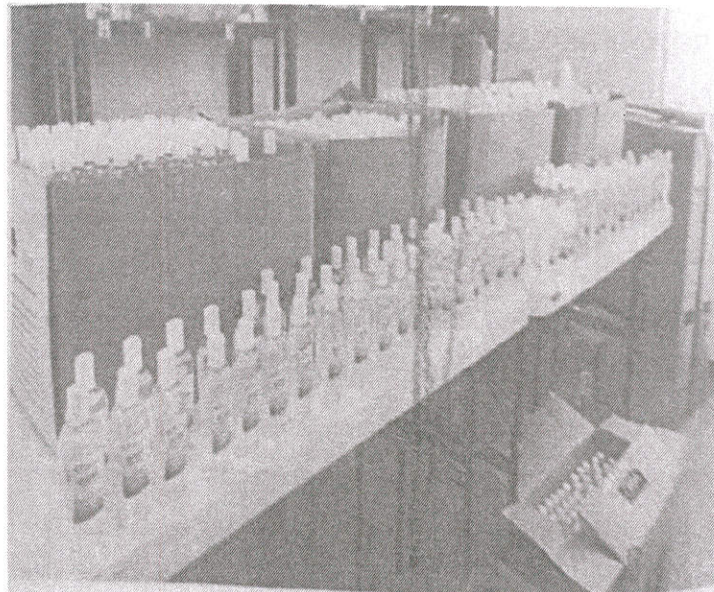
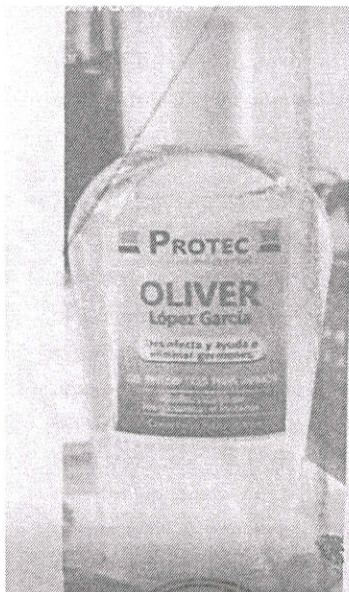
Aunado a lo anterior, si bien en las fotografías que presenta el denunciante, mismas que se anexan a continuación:





Como lo señala el denunciante, aparece el nombre del denunciado Oliver López García, lo cierto es que las mismas no pudieron ser comprobadas por la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral, ya que como se desprende del acta número UTJCE/QD/CIRC-017/2020 de fecha uno de julio de dos mil veinte, de las ligas proporcionadas no pudo corroborarse la existencia de las fotografías o de los actos que se le atribuyen a los denunciados, aunado a que como se mencionó en párrafos anteriores los denunciados desconocieron los perfiles de la red social.

Ahora, si bien existe el acta número UTJCE/QD/CIRC-046/2020, de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, levantada por el personal de este Instituto, en la que consta que realizó la verificación en el albergue de Matías Romero, donde personal que trabaja en dicho albergue al momento de realizarle la entrevista correspondiente, en el cual informó que efectivamente las fotografías del lugar que se visualiza en las fotografías que se pusieron a la vista de dicho personal se tratan del albergue en comento, sin embargo, el mismo desconoce sobre los elementos que se pueden advertir, ya que si bien reconoce que la Presidenta del DIF Municipal de Santa María Petapa, realizó la entrega de botellas de gel antibacterial, la misma no reconoce que sean las que aparecen en las fotografías que se pusieron a su vista, o bien no manifiesta de manera expresa que sean las mismas botellas que las que menciona el denunciante, por lo cual para mayor claridad se procede a insertar las imágenes en comento:



Por estas razones es que de las pruebas técnicas que ofrece el denunciante en su escrito inicial de denuncia, de conformidad con el artículo 326 numeral 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, no se les puede dar

pleno valor probatorio, inclusive ni de manera indiciaria, ya que las mismas ya no se encontraban visibles o disponibles en la red social denominada Facebook, por lo cual, este Consejo General determina que, **no se acredita** la existencia de las violaciones a la normativa electoral consistentes en **promoción personalizada e indebido uso de recursos públicos**.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO. El Consejo General es competente para resolver el Procedimiento Ordinario Sancionador número CQDPCE/POS/067/2020, en términos del considerando PRIMERO.

SEGUNDO. **No se acreditan** las infracciones a la normatividad electoral denunciadas.

TERCERO. Notifíquese a las partes haciendo uso de las tecnologías de la información, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, numeral 2, 12 y 59, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias; el Acuerdo General IEEPCO-CG-05/2020; el acuerdo celebrado por la Junta General Ejecutiva de este órgano el veinte de marzo de dos mil veinte; así como lo estipulado en los artículos 5 y 19 del Reglamento de Administración y uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del IEEPCO.

La presente Resolución fue aprobada por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales siguientes: Wilfrido Almaraz Santibáñez, Nayma Enríquez Estrada, Alejandro Carrasco Sampedro, Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López y Carmelita Sibaja Ochoa, Consejera Presidenta Provisional; en la sesión extraordinaria celebrada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el día ocho de octubre del dos mil veintiuno, ante el Secretario Ejecutivo, quien da fe.

CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL

SECRETARIO EJECUTIVO

CARMELITA SIBAJA OCHOA

LUIS MIGUEL SANTIBÁÑEZ SUÁREZ

CONSEJO GENERAL
OAXACA DE JUÁREZ, OAX.